



*Gran paradoja: AMLO hizo campaña por 18 años para barrer la corrupción de arriba hacia abajo y acabó por dejar la casa llena de basura.*



**LUIS CARLOS  
UGALDE**

luiscarlosugalde@integralia.com.mx

## Más corrupción

**M**éxico obtuvo la peor calificación en corrupción en los últimos 30 años: 26 de 100 puntos posibles, según Transparencia Internacional. Somos el país 140 de los 180 que califica. Estamos en el último lugar dentro de los 38 integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y en el penúltimo dentro de las economías más grandes (G-20), solo por arriba de Rusia.

Si nos comparamos con nuestro barrio latinoamericano, también quedamos mal parados. Somos el país más corrupto entre las economías más relevantes, entre ellas Brasil, Perú, Colombia, Argentina y Chile. Solo le ganamos a Venezuela y a los vecinos centroamericanos de Guatemala y Honduras.

Gran paradoja: López Obrador hizo campaña durante 18 años para barrer la corrupción de arriba hacia abajo y acabó por dejar la casa llena de basura. Ni Peña Nieto —a quien se le acusó de corrupción ostensible y desvío de recursos— dejó un legado tan sombrío. ¿Por qué?

Uno, por el enfoque moralista de López Obrador. Poco después de iniciar su gobierno sacó su pañuelo blanco y decretó que ya no había corrupción y el resto del sexenio fue complacencia. Pensaba que su ejemplo iba a cundir a las bases de la administración pública. Su moralismo resultó equivocado.

Dos, porque quizá AMLO confundía austeridad con honestidad. Si tu estilo de vida es franciscano y no tienes departamento en Miami, eres honesto, aunque uses dinero del gobierno para fundear campañas políticas de forma ilegal. López Obrador vivió al amparo del dinero en efectivo buena parte de su vida política y justificaba que dinero para su movimiento era dinero legítimo, aunque su origen fuera ilegal.

Tres, porque el Congreso abdicó de su obligación de controlar al Ejecutivo y de vigilar el ejercicio del gasto público. La Auditoría Superior de la Federación fue sometida políticamente y eso dio manga ancha para que los gobiernos relajaran sus mecanismos de control interno.

Cuatro, por la falta de planeación del gobierno. Nunca hubo plan alguno para diseñar proyectos y construir obra pública con directrices claras y mecanismos de evaluación. Un ejemplo es la refinería de Dos Bocas, que se dijo costaría 8 mil millones de dólares y que comenzaría operaciones en 2022. Ya estamos en 2025, su costo ha rebasado los 20 mil millones de dólares y no refina petróleo.

Pero la razón más importante es que el gobierno anterior jamás castigó la corrupción a gran escala. No hubo caso alguno de castigo, salvo los expedientes fallidos de Rosario Robles (cuyo proceso se inició —por cierto— a raíz de una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en 2017) y de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, ahora libre, ambos acusados de desvío de recursos.

Vale la pena recordar que, durante los años de Peña Nieto, el gobierno emprendió, forzado por la presión política, procesos por peculado o enriquecimiento ilícito en contra de 12 personas gobernadoras (10 del PRI y



dos del PAN), entre ellas César Duarte en Chihuahua, Javier Duarte en Veracruz o Roberto Borge en Quintana Roo. En contraste, Ignacio Ovalle, titular de Segalmex cuando ocurrió el mayor caso de corrupción del sexenio anterior, mantuvo un cargo en el gobierno hasta el último día.

Pero acaso la mayor evidencia del desdén (o complicidad) de López Obrador para castigar la corrupción fue someter a votación si sancionaba la presunta corrupción de los expresidentes. En lugar de proceder si había evidencia, sobre todo de su antecesor Peña Nieto a quien acusó por muchos años, hizo una consulta popular y la participación fue tan baja que el resultado no fue vinculante. Así se lavó las manos.

Los primeros meses del nuevo gobierno presagian la misma tolerancia a la corrupción. Muchos personajes señalados incluso por vínculos con el crimen organizado, entre ellos ex gobernadores, han sido promovidos a cargos diplomáticos o en la administración pública. Otros como Cuauhtémoc Blanco, ex gobernador de Morelos, y sobre quien pesan señalamientos de corrupción desde que era alcalde de Cuernavaca y ahora de violación, parecen tener manto protector.

Gran decepción: el Presidente que tuvo la fuerza política y la legitimidad histórica para acabar con el cáncer histórico, nos dejó más atascados en la corrupción que otros gobiernos a los que tanto criticó.